

5. No es país para jóvenes

Gracias a la reforma, los ajustes no han sido tan peligrosos como podrían haberlo sido por el rebrote de la crisis

Julio Pomés, Presidente de Civismo

El desempleo juvenil en España (57,2%) no tiene equivalente en la eurozona.

Existen varios obstáculos a la contratación. El principal, los impuestos al trabajo. Europa se ha acostumbrado a unos niveles de Bienestar que le exigen gravar con tributos en torno al 40% de la renta de los trabajadores, lo que dificulta la contratación. Y España es el país de la OCDE que más los ha subido en el último año, hasta 1,4 puntos. De acuerdo con nuestro

estudio El día de la Liberación Fiscal, desde 2010 hasta hoy la tributación sobre la renta de un trabajador medio se ha incrementado en un 15,8%. Esta fiscalidad afecta muy negativamente a los jóvenes ya que muchos de ellos, sin experiencia, no pueden ofrecer un producto con el que salvar esta brecha fiscal.

Frente a España, países como Chile, Nueva Zelanda o Israel, que hacen suyo el dicho de que la mejor política social es crear empleo, con tributos de

sólo el 7% en el caso de Chile.

El segundo, un Salario Mínimo que no responde a los criterios de mercado. Sólo durante la legislatura de Zapatero se elevó un 40%, frente a un 16% de la inflación. El SMI creció incluso en plena deflación y cuando la brutal destrucción de empleo aconsejaba ya bajarlo. Supone un salto complicado para quienes pueden ofrecer un bajo valor añadido, sobre todo en las regiones más deprimidas, donde está terriblemente cerca del salario mediano. Pensemos, además, que esta nómina supone un coste real para la empresa de 1.100 euros al mes. Además, el SMI tira hacia arriba de los sueldos del resto de los secto-

res profesionales, que se miden por comparación, haciendo que muchos empleos no sean viables.

La solución consiste en equiparar los costes y la productividad. Una vía sería rebajar los costes del trabajo, pero también se podrían mejorar los costes de otros factores, como la energía o el transporte, extremadamente regulados. Otra opción es mejorar la productividad, para lo que existen dos alternativas. Por un lado, el contrato único permitiría reducir el salto, en costes de despido, entre los fijos y temporales. Esto reduciría los costes de mantener a los trabajadores dentro de la empresa, limaría la rotación y aumentaría la formación continua,

Crecimiento por encima de la inflación



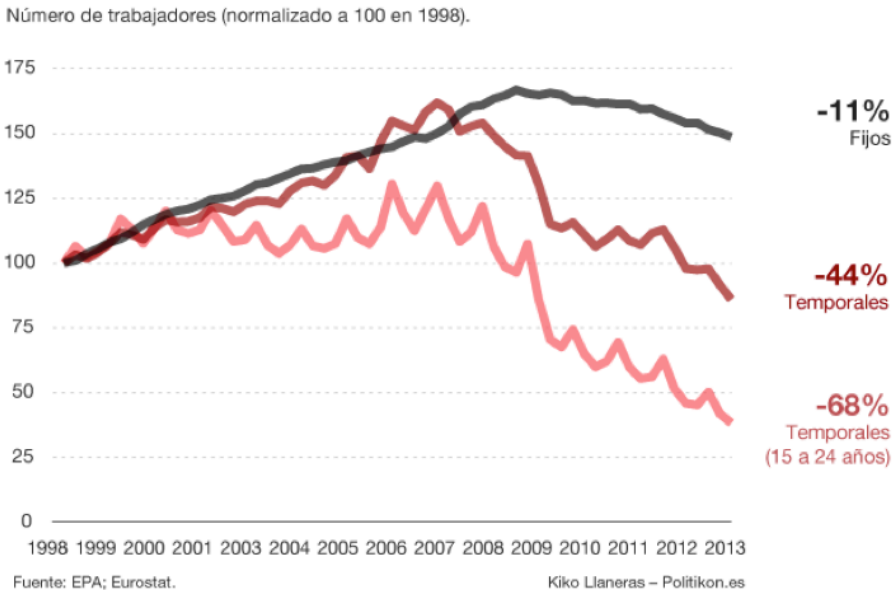
permitiendo que los trabajadores aporten un mayor valor añadido. La otra vía es readaptar el tejido productivo. Las empresas españolas de un tamaño medio-grande son mucho más eficientes que sus equivalentes europeas pero, lamentablemente, vivimos en un país de pymes.

Hasta el 40% de los trabajadores está empleado en empresas de menos de diez trabajadores y apenas un 20% en las compañías que superan los 250. Esto supone menos oportunidades de entrada al mercado de trabajo, porque las

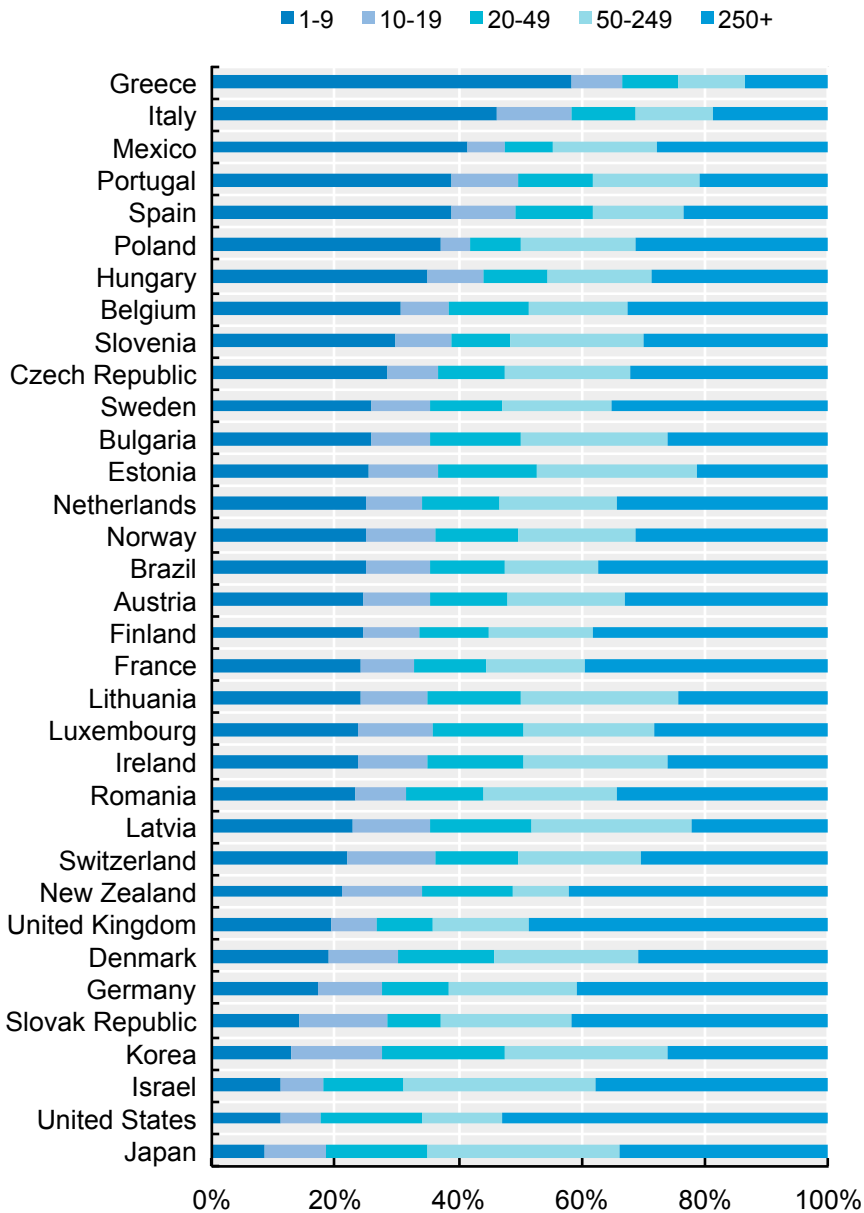
empresas grandes suelen ser más flexibles e iniciar nuevas áreas de negocio, lo que permite incorporar trabajadores y renovar la plantilla, además de aprender de los demás. Esta proliferación de pymes en nuestro tejido productivo se ha fomentado con las bonificaciones a la contratación en las micropymes, que por otro lado suponen una traba que provoca que a muchas empresas no les compense seguir creciendo.

Efectivamente, como las ayudas desaparecen cuando la empresa supera los 4,7 y los 6 millones de facturación, o

Dualidad: La crisis para trabajadores fijos y temporales



Distribución de los empleados según el tamaño de la empresa



Fuente: OCDE

bien los 50 trabajadores contratados, muchas no quieren arriesgarse a atravesar estas barreras, como muestra un estudio de la Universidad de Berkeley que recopila los datos de 300.000 empresas españolas a lo largo de una década. Superar los 50 trabajadores obliga a crear un comité de empresa, a través de elecciones sindicales, y con obligación de informarle periódicamente sobre todos los detalles de la empresa y el sector. Este comité fiscalizará la actividad de la empresa, tanto cuestiones laborales como las que no lo son. Además, sus miembros gozan de horas sindicales remuneradas, lo que supone un aumento de los costes laborales en un 3,75% para las empresas con 50 empleados. Estos tampoco pueden ser despedidos, por lo que su productividad en el horario laboral suele bajar.

Hay más condicionantes: contratar a un 2% de discapacitados, la obligación de tener un comedor en la empresa o la de dejar un mes para negociar los ERE.

Y además, los costes administrativos se multiplican: el IVA pasa de liquidarse de forma trimestral a mensual y el Impuesto de Sociedades de anual a trimestral, y es necesario cumplir obligaciones crecientes de auditoría y cuentas

Gran parte de los problemas económicos actuales tienen su origen en la política de dinero barato del BCE

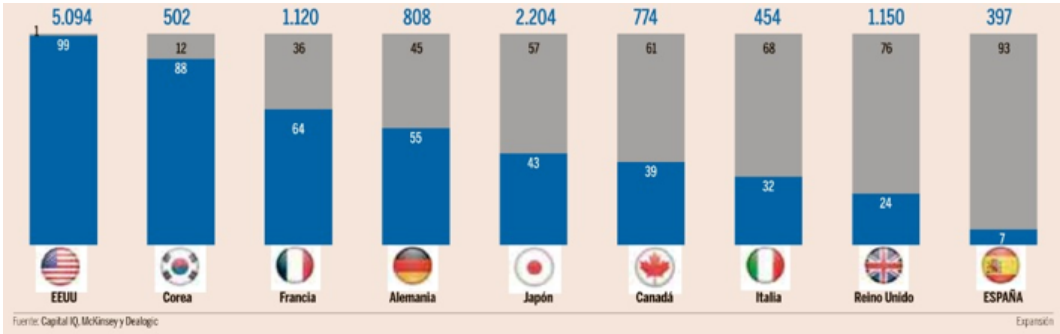
anuales. También existe la posibilidad de sufrir una inspección, que conlleva una pérdida de horas de trabajo. Finalmente, ampliar un local para dar cabida a más personas supone pedir decenas de permisos e informes municipales, para los que en muchos casos hay que esperar durante meses. Para acabar con esta dinámica perversa, es necesario atenuar las exigencias y hacerlas más progresivas.

Ambas soluciones, tanto el contrato único como reducir las barreras al crecimiento de las empresas casan bien con el reto que se plantean los principales expertos laboristas, que es tanto dar entrada a los jóvenes como garantizar su formación e insertarlos en la cadena de creación de valor. No obstante, no dan respuesta a otra cuestión: Si son problemas españoles, ¿por qué la proporción de jóvenes en paro ha crecido tanto en todos los países de Europa?

Efectivamente, gran parte de los

España, a la cola en financiación alternativa al crédito bancario

La financiación a través de préstamos y de bonos. Total deuda de empresas con ingresos superiores a 500 millones de dólares. Datos de 2011, en miles de millones de dólares



Fuente: Capital IQ, McKinsey y Dealogic

Expansión

- Porcentaje de bonos corporativos sobre el total de deuda
- Porcentaje de créditos sobre el total de deuda

problemas tienen su origen en la política de dinero barato del BCE, que se agravaron con la excesiva dependencia de la banca en España. Desde finales de los 90 hasta 2007, el crédito fluyó de forma incesante sobre los sectores que más crecían (léase construcción, por ejemplo) y, como se desarrollaban de forma imparable, atraían todavía más capitales. Gran parte de este dinero lo dedicaron a crecer comprando otras empresas a precios de oro, que pagarían a base de beneficios futuros. Pero estos nunca llegaron. La música dejó de sonar y, para entonces, el sector privado había triplicado su endeudamiento en sólo 13 años: pasó de ser el 73,2% del PIB en 1996 al 212,1% en 2009.

Cuando todo estalla, los bancos re-

nuevan los préstamos para evitar enfrentarse a las pérdidas inmediatas, confiando en que la situación se haya resuelto en poco tiempo. Pero no fue así y ahora nos encontramos con todo un sistema bancario entrampado en empresas zombis y que, a pesar de concentrar el 320% del PIB (frente al 70% en Estados Unidos), no puede dar crédito a las compañías de sectores prometedores. La alternativa no es mucho más prometedora: apenas las grandes empresas pueden emitir bonos de deuda y el capital riesgo ronda el centenar de millones de euros al año. Más aún, los business angels, que parecen ser la solución del Gobierno para salvar a las empresas brillantes, pero ahogadas, sólo manejan 8 millones de euros de

presupuesto anual, con los que en 2011 cerraron 66 operaciones. Una gota en un océano de 3 millones de empresas.

El problema es que España emitió en 2012 cerca de 70.000 millones de euros en deuda pública nueva, aparte del rescate, lo que deja sin liquidez a los mercados. Los políticos se vanaglorian de cada subasta que es “un éxito” y, tras un demoledor efecto crowding out, se extrañan no quede financiación para las pymes. Dan incentivos a la banca para que compre deuda pública y utilizan expansiones de liquidez para que los activos públicos dejen de percibirse como arriesgados, lo que resta interés a invertir en empresas privadas.

El tipo 0 o negativo que algunos economistas proponen, imitando a Dinamarca, tampoco será la panacea. La clave radica en el elevado volumen de déficit público (Francia y Alemania proponen dos años más para ajustarlo, que se suman a los dos que ya se ha pospuesto hasta la fecha) y en que depositar deuda pública en el BCE sirve para obtener liquidez por el 95% de su valor, mientras que los pagarés de una pyme apenas computan por el 40%. En esta tesitura de falta de crédito, la solución pasa por acercar ambas cifras, sobre

El 55% de los parados sólo tiene formación obligatoria y los que tienen carrera o FP no responden a la demanda laboral

todo rebajando la primera, y acelerar la reducción del déficit para poner en valor la deuda corporativa.

También hay un problema de formación, ya que el 55% de los parados no tiene más formación que la estrictamente obligatoria y los estudios de quienes sí tienen una carrera o Formación Profesional no responden a las expectativas del mercado. En 2012, el número de licenciados universitarios en paro creció un 21%, debido a que las nuevas generaciones tienen cada vez más difícil encontrar empleo.

Hasta hace pocos años, era fácil crear puestos de trabajo con el dinero de los extranjeros (España llegó a tener un déficit por cuenta corriente del 10% del PIB) e invirtiendo en los sectores donde se suponía que había que hacerlo, pero ahora los caminos no son tan obvios y es necesario crear nichos y sectores nuevos. Se hace camino al andar, pero mientras se busca la línea recta hacia el

nuevo paradigma corremos el riesgo de pasar 40 años dando tumbos en el desierto. El Ejecutivo continúa empeñado en poner palos en las ruedas de cada oportunidad que emerge y desincentiva gran parte de las iniciativas ciudadanas con una burocracia eterna. De acuerdo con el Banco Mundial, España necesita hacer cinco trámites para exportar un producto: ningún país de nuestro entorno supera esa cifra. Y el problema, además, es que gran parte de las autorizaciones se retrasan sine die, lo que causa una paralización en toda la cadena de valor y un agotamiento de los recursos financieros hasta que el producto se vende. La Federación de Autónomos ATA cifra en 1.100 millones el coste anual de esta burocracia.

Los economistas piensan que las deducciones a los business angels dejan mucho que desear, ya que el capital riesgo está prácticamente eximido de pagar Impuesto de Sociedades por beneficios en cualquier caso mientras que los primeros deben reinvertirlos en otra entidad joven. Puede ser un principio, pero no se deben dejar de lado otras reformas estructurales. Favorecer las concesiones en educación, vía cheque escolar, introduciría un elemento dinamizador que

No se debe dejar de lado la reforma de la Admón. y la incursión privada en tareas que ahora desempeña el Estado

daría entrada a recién licenciados.

Esta posición, sin embargo, es sumamente complicada. La política sigue al votante medio y este centro en las sociedades occidentales se está desplazando a la población de edades cada vez más avanzadas. Traducido a la práctica: los jubilados han sufrido leves pérdidas de poder adquisitivo durante un par de años, mientras que los jóvenes hasta 29 años han visto como su renta media caía hasta los 9.150 euros al año, niveles que se consideran al borde de la pobreza. Resolver el paro juvenil exige combatir la sensación de que se trata de un mero problema coyuntural y que basta con esperar, porque entonces se convertirán en treintañeros sin experiencia ni valor añadido. Liberar las trabas que impiden que el 57% de una generación trabaje es uno de los mayores retos de Europa desde su fundación y eludirlo supone enfrentarse a la ruina de nuestras sociedades a medio plazo.